

Conflictos sociales en la Argentina de Kirchner:

Cambios cualitativos de la protesta social en el largo plazo (1990-2005).

“La historia de los grupos sociales subalternos es necesariamente disgregada y episódica. No hay duda de que en la actividad histórica de estos grupos hay una tendencia a la unificación, aunque sea a niveles provisionales; pero esa tendencia se rompe constantemente por la iniciativa de los grupos dirigentes y, por lo tanto, sólo es posible mostrar su existencia cuando se ha consumado ya el ciclo histórico, y siempre que esa conclusión haya sido un éxito. Los grupos subalternos sufren siempre la iniciativa de los grupos dominantes, incluso cuando se rebelan y se levantan”¹

1. Introducción: el presente como punto de partida.

El reciente conflicto de los pilotos y técnicos aeronáuticos con las empresas del sector, particularmente **Aerolíneas Argentinas** y **Austral**, sacudió a la opinión pública y costó al país más de mil millones de dólares en ingresos perdidos. Su trascendencia radica, desde nuestro punto de vista, en que reactualiza la problemática de la “cuestión social” bajo el gobierno kirchnerista. Como sabemos, el propio Presidente debió intervenir en la mediación entre trabajadores y empresarios para que se alcanzase al menos la necesaria tregua que rige actualmente. Esto se volvió obligado luego del estruendoso fracaso del Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, en lograr la conciliación a través de un arbitraje netamente pro empresarial.

En este sentido, el año 2005 fue un punto de inflexión en lo que respecta a la mayor **cantidad, intensidad y duración** de protestas de todo tipo de trabajadores **ocupados** desde la misma crisis de 2001 –destacan el conflicto de los trabajadores del Hospital Garrahan así como de otros hospitales públicos y privados, la huelga nacional de los docentes universitarios, la lucha de los judiciales, bancarios, etc.-. Dichas protestas sacudieron la economía, la sociedad y la política de nuestro país, y pusieron a prueba la moral y la capacidad del gobierno para procesar la contienda social y enfrentar a los diversos sectores en lucha.

En un primer balance, parece haber terminado la “tregua social” forzada que, producto del desempleo creciente, regía **en los sectores ocupados** de la economía desde los años noventa. Dicha “tregua” había dejado a los sectores excluidos de la sociedad –y especialmente a sus microscópicas “vanguardias” organizadas- el monopolio de las calles y las plazas, que ocasionalmente compartieron con estatales y estudiantes. La recuperación económica sostenida, el aumento en los niveles de empleo, el registro

fiscal de una gran cantidad de trabajadores antes en situación legal irregular y el discurso triunfalista en lo referente al rumbo económico de nuestro país cambiaron las condiciones de la lucha al instalar en la opinión pública el sentimiento de que **era posible** una redistribución del ingreso. Esta redistribución compensaría las largas pérdidas sufridas en la última década, pero especialmente tras la devaluación de enero de 2002, que concluiría estabilizada en torno al 300 %.

Al tiempo que la economía del país se recuperaba, la inflación creciente, que recortó los salarios reales, actuó como detonante de reivindicaciones largamente soterradas. La imagen de una gestión exitosa, refrendada por una tremenda victoria electoral del oficialismo en las elecciones legislativas de octubre, quedó ligeramente desdibujada por el fracaso de la estrategia gubernamental basada en “acuerdos de precios”, que el Ministerio de Economía había generado para frenar, al menos hasta dichas elecciones, la estampida inflacionaria². Dicha estampida es, vale aclararlo a nuestro juicio, más un resultado de la continuada pero no admitida *dolarización* de la economía argentina que de una -por otra parte indudable- recuperación de la demanda.

En todo caso, aunque hemos de referirnos a algunas de las cuestiones mencionadas, el eje central de esta exposición circulará en torno de los cambios *cualitativos* que pueden observarse en la evolución secular de la conflictividad social en nuestro país.

2. 1989-1999: otra década infame.

Aunque ascendió en 1989, recién en 1991 el gobierno de Carlos Menem logró, finalmente, estructurar el rumbo de la Argentina en torno a las recetas emanadas del Consenso de Washington.

Para lograr dicho cambio de rumbo, Menem enfrentó la oposición, entre 1990 y 1992, de casi todos los gremios de las empresas a privatizar –ferroviarios, telefónicos, y otros empleados de servicios públicos, quienes lucharon junto a los docentes y demás gremios estatales **sin el apoyo de la central sindical nacional**, la Confederación General del Trabajo (CGT), **dominada por sectores afectos al Gobierno**-. La victoria del oficialismo fue total: las huelgas fueron derrotadas una a una, los liderazgos sindicales quebrados, y las manos del Poder Ejecutivo quedaron libres.

La aprobación de la Ley de Convertibilidad, que regiría desde el primero de enero de 1992, puede considerarse la piedra basal de estos *tiempos difíciles*. El control

de la escalada hiperinflacionaria de años previos, que adelantara en 1989 la cesión del mandato por parte del gobierno radical al candidato electo del justicialismo, ya estaba asegurado en ese año de 1991, y operadores de medios oficialistas pudieron organizar, en respuesta a una movilización contraria a la anunciada política de privatizaciones, la llamada *Plaza del Sí*, donde se congregaron diferentes grupos sociales alineados con el menemismo.

Sin embargo, los efectos más poderosos procedieron no tanto del **control político** de los sindicatos como de las **consecuencias sociales y culturales** de la implementación de las mencionadas políticas neoliberales, consecuencias que cambiaron decisivamente la correlación de fuerzas entre obreros y patrones en el mercado de trabajo, y volvieron a amplios sectores de la población menos sensibles al disenso de tipo sectorial.

En primer lugar, cada vez más argentinos veían sus derechos sociales, laborales y hasta civiles cercenados por la fuerza misma de las circunstancias. Esto sucedía como consecuencia del cierre masivo de los talleres y fábricas que orientaban su producción hacia un mercado interno en el cual eran incapaces de competir con la industria extranjera, dadas las condiciones imperantes –tipo de cambio bajo y fijo, desregulación aduanera, etc.-.

El desempleo creciente, que alcanzaba ya dos dígitos en 1993, a medida que se imponía la “racionalización” en las empresas privatizadas. La misma no era otra cosa que un eufemismo para ocultar el verdadero rostro de la veloz tecnificación, hecha a su vez conveniente por las facilidades otorgadas a las inversiones extranjeras: los despidos masivos de trabajadores funcionaron como un fuerte agente de disuasión para quienes pretendiesen ejercer el legítimo derecho a la huelga.

En tales condiciones, y carentes de una organización sindical o de cualquier otro tipo dispuesta a luchar contra la política de desindustrialización sistemática ejecutada con perversa eficiencia por el gobierno justicialista y apoyada por la cúpula cegetista, los sectores ocupados del área privada no tenían la fuerza para motorizar una escalada de protestas.

Si bien la racionalización avanzó también en el sector público, aquí las condiciones eran otras. Ya en 1992 surgía una central alternativa a la CGT, en la cual se reunían los sectores más golpeados por las políticas públicas: la CTA. En 1994 -año de fuerte crecimiento del PBI, pero también de la desocupación y la pobreza- pudimos

asistir a una masiva marcha de protesta organizada y convocada por esos diversos sectores independientes -la *Marcha Federal*-.

Algunos de los gremios “derrotados” de 1990-1992 mostraban, pues, una resistencia inusitada, y comenzaban un camino de reagrupamiento. Una tradición de mayor estabilidad laboral permitió a docentes y estatales iniciar una lucha que, sobre todo después del cimbronazo coyuntural de 1995 –cuando la desocupación oficial alcanzó el récord del 18,6 %- contó con el aval social incluso de grupos que continuaban apoyando las políticas oficiales.

Sería imposible, no obstante, deducir de este aval un punto de partida para la crítica de las políticas económicas del menemismo. El apoyo a la lucha docente por parte de los más diversos sectores sociales procedía, en cambio, de la larga tradición cultural que, desde los orígenes mismos de la Argentina moderna, privilegiaba la importancia de la educación y la cultura como herramientas de ascenso y movilidad social en nuestro país³. Pocos veían entonces, que esa Argentina, con todos sus defectos, estaba agonizando.

Pues esta percepción retrospectiva corre el riesgo de ignorar el enorme arraigue cultural e ideológico del discurso neoliberal en la sociedad, y en especial en el seno de los sectores medios. **Si las mencionadas huelgas docentes gozaron de cierta benevolencia por parte de la opinión pública, se debió al éxito de sus representantes en mostrarlas como la defensa de un interés común. En una sociedad cada vez más polarizada e individualista, la validez de un reclamo puramente sectorial era harina de otro costal.**

Esto no era casual. Las largas filas de desempleados, las fábricas vacías convertidas en galpones, no eran todavía la imagen saliente que de la Argentina se hacían sus habitantes: la otra cara del neoliberalismo –la estabilidad monetaria y crediticia, la paridad con el dólar y las facilidades que otorgaba en términos de ahorro y consumo de bienes internacionales, la rápida incorporación de nuevas tecnologías en el sector servicios, la imagen, en fin, de una economía cuya potencial prosperidad a futuro parecía imposible poner en tela de juicio a medida que las inversiones extranjeras continuaran fluyendo por canales públicos y privados- le permitía a éste mostrar como coyuntural lo que era ya estructural, y como pasajeros los que a la postre serían sus más desgraciados legados sociales, que hasta hoy sufrimos.

Por el contrario, para la mayoría de los argentinos fue más fácil creer que las culpas del Gobierno pasaban por la afición indisimulable de algunos de sus funcionarios

a la ostentación conspicua de niveles de vida que no podían haber pagado con sus ingresos oficiales⁴. La corrupción y el “gasto político” eran los males a eliminar: el rumbo del país no estaba en discusión.

En este contexto, quisiéramos subrayar que protestaban aquellos más directamente afectados por las políticas neoliberales, pero también protestaban *quienes podían*. En primer lugar, los que no tenían nada que perder, pues con su trabajo lo habían perdido todo en materia de derechos. Nos referimos a **aquellos sectores que muy pronto, en vez de “desocupados”, término que implica una condición transitoria y define al sujeto por caracteres negativos, llamaríamos “marginales”, “excluidos” -o, como todavía se dice, “piqueteros”-**.

Incapaces de realizar protestas convencionales, iniciaron, al principio en el interior y luego progresivamente en Buenos Aires, cortes de rutas nacionales y provinciales, que les dieron cierta visibilidad pública. **Pero, carentes en los noventa de una organización firme –que en buena medida requiere de la capacidad de financiamiento de que hoy gozan estos grupos gracias a los planes sociales- no eran aún lo suficientemente fuertes como para estructurarse en tanto fuerza social estable.**

Luego, como ya ha sido señalado, los trabajadores estatales, nucleados en ATE, y en la CTA. También en este caso, no obstante, las movilizaciones de gran escala fueron reducidas, al menos, hasta el segundo sacudón de 1997, cuando ya muchos comenzaban a dudar de un futuro siempre promisorio.

En resumen, los años noventa hasta el final del segundo mandato de Carlos Menem no fueron años de grandes luchas sociales y/o políticas de tipo abierto, y las pocas excepciones culminaron las más de las veces en sendas derrotas. Los reclamos estaban bloqueados por la fuerza e impacto de la desocupación, la cooptación de los líderes sindicales tradicionales, y las dificultades de los sectores independientes para organizar espacios alternativos de disputa. **Pero sobre todas las cosas, pesaba la convicción generalizada de varios millones de argentinos respecto de la irreversibilidad y positividad de los cambios acaecidos, o bien de la plausibilidad de su corrección a través de medios puramente *políticos*, es decir, del cambio de elencos gobernantes. La misma oposición, como hemos mostrado en otra parte⁵, alentaba esas creencias para provecho propio, pero fue incapaz, una vez en el Gobierno, de generar un proyecto de salida.**

Sin embargo, **sería imposible comprender la fuerza de la protesta en los años posteriores si nos quedamos meramente con el saldo de demostraciones públicas realizadas.** Por el contrario, los años noventa fueron también los de la estructuración de diferentes fuerzas sociales que, como el mencionado CTA, agruparían en días futuros a diferentes grupos de trabajadores –pero centralmente, a estatales y desocupados- en torno a un programa que se postulaba alternativo. Más importante aún, **fueron años de intenso trabajo social, subterráneo y para nada visible de modo inmediato, años de surgimiento de decenas de organizaciones entonces minúsculas, que irían creciendo al calor de los fracasos sucesivos del nuevo gobierno** –una coalición opositora signada por el deseo de mantener con vida el modelo económico vigente todo lo que fuese posible y a cualquier costo-.

3. 1999-2001: La crisis desatada.

No es extraño, entonces, que en aquellos años recientes la cronología económica, la política y la social hayan estado tan cerca una de la otra: si bien la crisis económica podía rastrearse, al menos, hasta 1997, sólo se hizo evidente que los inversores no continuarían financiando nuevas inversiones hacia mediados de 1999.

El “banquete” que las privatizaciones del sector público en la década previa habían abierto para el capital foráneo ahora se cerraba bruscamente, en un contexto en el cual el alza de las tasas de interés en los países centrales hacía menos apetecibles los riesgosos mercados periféricos. Las políticas consecuentemente recesivas adoptadas desde su mismo ascenso parecieron a un gobierno débil el único medio de mantener cierto control sobre las reservas bancarias en un contexto de convertibilidad, del cual parecía imposible salir sin costos políticos que el nuevo elenco no estaba dispuesto a pagar.

Se abría una etapa en la cual los organismos multilaterales de crédito avanzaban sobre la formulación misma de las políticas económicas. Seis ajustes fiscales de gran escala, un séptimo en preparación, aumentos en impuestos al consumo, la rebaja de los salarios de los empleados públicos y jubilados, y la privatización definitiva de la previsión social, fueron algunas de las medidas ejecutadas. Estas profundizaron el escenario depresivo hasta niveles inéditos, e igualmente fracasaron en evitar la veloz fuga de capitales iniciada ya en el año 2000, pero que hacia marzo de 2001 se convirtió en una verdadera estampida.

Mientras tanto, ya **la esfera pública había sido ganada por los grupos de desocupados del conurbano bonaerense**, algunos de los cuales basaban sus prácticas en estilos cooperativos y democráticos de decisión y trabajo. **Aunque se seguía tratando de grupos minoritarios, su gravitación en la política era ya lo suficientemente alta como para que vastos sectores de la población se viesen obligados a pronunciarse sobre su accionar.** Los grupúsculos de antaño eran ahora organizaciones territoriales con zonas de influencia bien definida, metodologías y estilos propios, y una gran heterogeneidad en lo referente a sus objetivos.

Para el observador latinoamericano promedio, tal vez este tema amerite una explicación aparte. Muchos países cuentan hoy con amplios sectores sociales bajo las líneas de pobreza e indigencia, con grandes grupos de la población que dependen de formas de trabajo informal, etc. En sí mismo, esto es cualquier cosa menos novedoso para dichos lectores. ¿Qué causas obraron en la Argentina para que pudiese observarse una tan rápida organización social de los sectores excluidos?

Indudablemente, las razones deben buscarse en el campo de **la historia, la ideología y la cultura** de la clase obrera argentina. Descartamos así toda otra vertiente interpretativa, basada en ridículas reelaboraciones de conceptos actualmente poco útiles, como el marxiano de “Ejército de Reserva”. Dichos conceptos sí eran operativos en la etapa del capitalismo industrial expansivo e inclusivo, que perduró en los países centrales desde mediados del siglo XIX hasta finales de los años setenta del siglo XX. **Ahora sabemos bien que no se trata de crisis pasajeras tras las cuales el mercado de trabajo podrá absorber a las masas en disponibilidad, como en tiempos pasados. Los sectores que hoy se han quedado afuera del circuito económico de producción, distribución y consumo, en su amplia mayoría no han de ingresar de nuevo al mismo. Lo que antes era una cíclica crisis, ahora se revela como un nuevo orden económico,** en el que es necesario buscar otras categorías de análisis, implementar otras políticas, pensar nuevas formas de construcción, etc.⁶

Hemos hablado de razones ideológicas, históricas, culturales, todas ellas específicas a la historia argentina. Podrían agregar razones de tipo político. En definitiva, **de lo que se trata es de la larga tradición de lucha social urbana de trabajadores con una amplia experiencia de clase como obreros, en un país que contó durante varias décadas –esto es, antes de 1980- con un relativamente bajo nivel de desempleo. La experiencia de clase de estos obreros, atravesada por el complejo y contradictorio fenómeno del peronismo, incluía una forma concreta de**

conciencia política que hacía propias, en tanto derechos, innumerables reivindicaciones económicas y sociales, y abrevaba en una “estructura de sentimiento” que establecía límites estrictos a aquellos cambios considerados “justos”⁷. Puesto en conjunto con una muy poderosa organización sindical centralizada, este tipo de conciencia política, no necesariamente anticapitalista, pudo ser barrido por la dictadura militar de la esfera pública. Pero, de una forma u otra, persistió, como prueba el proceso comentado, en la conciencia social de la población trabajadora.

Esa especificidad de la Argentina es la que explica, creemos, la rapidez con que nuestros sectores de trabajadores desocupados se organizaron, así como las características propias⁸ de sus reivindicaciones sociales y políticas. En verdad, **los excluidos argentinos no luchan en tanto trabajadores ni “piqueteros”, sino en tanto ciudadanos que tienen derecho a comida, vivienda y educación. Esto implica que la interpelación es al Estado y sus funcionarios políticos, lo que debiera volver más modestos los planteos referidos a la potencialidad “socialista” o “anticapitalista” que algunos dirigentes creen vislumbrar en sus dirigidos.**

Cuando, en diciembre de 2001, ante la pasividad de la CGT, dichos grupos de trabajadores desocupados ganaron las calles en respuesta al Estado de Sitio y en colusión con los sectores medios -golpeados por la escalada de ajustes fiscales y sus consecuencias, así como por el bloqueo al acceso en los ahorros bancarios- parecía reeditarse la vieja alianza de clases que había sustentado en el pasado al proyecto nacional-populista⁹.

4. 2002-2003: La etapa de Duhalde. El nacionalismo católico toma la posta.

Pero demasiada agua había pasado bajo el puente, y se confundían quienes vieron en estos indicios el signo de una cooperación duradera, capaz de oponerse con eficacia al bloque histórico dominante y forjar una alternativa política y social al orden vigente. Los objetivos comunes de ambos sectores se agotaron la misma tarde que, tras la caída de Cavallo, renunciara De la Rúa.

No obstante, de nuevo, debemos cuidarnos del esquematismo de ocasión. Lo sucedido tras el veinte de diciembre no implica en modo alguno que sea válido reducir los móviles retrospectivos de las clases medias a la recuperación de sus ahorros, o su posterior “pasividad” a un “abandono de la lucha”. Simplemente, los términos están mal

planteados, y quienes sostienen estas tesis facilistas dan por supuesto más de lo que debieran.

Fijémonos para ello en la cronología de los sucesos. El descontento popular generalizado se había expresado con claridad ya con anterioridad a las jornadas de diciembre. Las elecciones de septiembre de 2001 habían arrojado niveles de abstención, voto en blanco y afines que superaban toda marca histórica desde el retorno de la democracia. El Gobierno había quedado cercado en el Parlamento, y dependía de la oposición para seguir gobernando.

Más aún, la movilización espontánea de decenas de miles de argentinos hacia la sede del Ejecutivo la noche del 19 de diciembre comenzó más de veinte días después del congelamiento de los ahorros bancarios. Su disparador inmediato fue la declaración del Estado de Sitio, medida que pretendía garantizar niveles mínimos de “paz social” para dejar al Gobierno en situación de profundizar los ajustes fiscales y sociales.

Quienes participamos de la movilización esa noche pudimos observar el desarrollo inédito de un completo ciclo de protesta multisectorial que, si apuntó inicialmente al Ministro de Economía, casi inmediatamente de conocerse la renuncia de éste, dirigió su ataque a la conducción política del país: es decir, al propio presidente. Las consignas orientadas a medidas particulares fueron eclipsadas por los objetivos directamente políticos de la protesta. Pero estos objetivos políticos no eran en modo alguno antisistémicos. No se trataba de una puja acerca del futuro del capitalismo argentino *tout court*, sino de la defensa de derechos civiles y constitucionales considerados propios, atacados por la furiosa ofensiva neoliberal. Por ello es comprensible que, meses después, los niveles de participación volviesen a los parámetros habituales: para los sectores medios, caído De la Rúa, estabilizada la economía y detenida la escalada autoritaria, no había mayores metas comunes a lograr. El descontento, naturalmente, perduró, pero ahora se expresaría como querían sus protagonistas que se expresara: a través de la continuidad democrática, por la vía de las urnas, que, como muestra el caso venezolano, no es necesariamente menos combativa que la acción directa.

Las jornadas de diciembre de 2001 derivaron, en definitiva, de una convergencia circunstancial, carente de cualquier forma o esbozo de proyecto alternativo. Su resultado histórico más importante, la caída del gobierno de la Alianza, abrió finalmente paso a una etapa en la cual dicho bloque dominante pudo reubicarse, no sin dificultad, en torno del Duhaldismo, y aprovechar el desconcierto estratégico de los sectores populares para

imponer una salida de la Convertibilidad que le permitiría “licuar” deudas en el ámbito de aquellas contraídas por el Estado durante las décadas anteriores.

De un plumazo, la devaluación permitió resolver el cuello de botella del déficit fiscal, que se había vuelto políticamente insoluble bajo la Convertibilidad, a través de las retenciones a las exportaciones de bienes primarios. En lo sucesivo, la inflación –de más de un 30 % incluyendo servicios no transables- haría el “trabajo sucio” que anteriormente había operado por rebaja directa de salarios públicos y aumento de impuestos indirectos al consumo.

El nuevo lugar de las organizaciones sociales, tras una década de duro trabajo y organización, se vio recompensado con una redistribución parcial del flamante superávit a casi tres millones de familias. Ese dinero permitió, a su vez, consolidar a las organizaciones, al brindarles una, al menos, escueta base financiera. Pero un diagnóstico político errado llevaría a muchos dirigentes a creer que las luchas callejeras de diciembre eran sólo el preludio de acciones de mayor escala, la apertura de un proceso de “transición al socialismo”, y disparates de esa naturaleza no fueron precisamente oportunos en momentos en que se hacía cada vez más visible la esperable brecha que expresaba las diferencias de objetivos entre los sectores medios y los dirigentes de las organizaciones sociales de desocupados, así como entre estos dirigentes y sus propias bases.

Distintas expresiones de dichas diferencias fueron visibles en las llamadas “Asambleas Populares”, que, integradas por la clase media, surgieron con posterioridad a las jornadas de diciembre. Carentes de una voluntad orientada a la generación de una alternativa, fueron principalmente espacios de coordinación de actividades a escala barrial. Pocas de ellas mantuvieron contacto con las organizaciones de desocupados, y ese contacto, en la mayoría de los casos, fue efímero: hacia mediados de 2002, aún las más fuertes ya agonizaban, ante la consolidación política y el reordenamiento del bloque dominante

No obstante, todavía un oscuro episodio acaecido en medio de una manifestación de protesta en junio de 2002, que acabó con la vida de dos militantes sociales de la organización “Aníbal Verón” –Kostecki y Santillán-, destrozó las pretensiones de concordia social del Duhaldismo, y forzó la salida electoral a la que éste se había negado inicialmente.¹⁰

5. 2003-2005: recuperación económica y nuevos repertorios de protesta.

Ya hacia junio de 2002 comenzaban a atisbarse los primeros signos de una recuperación económica que el tiempo iría consolidando. De la mano de las exportaciones, el surgimiento de emprendimientos productivos en áreas afines, y de una devaluación que actuaba en sí misma como barrera tarifaria, el empleo y la producción nacionales comenzaron una lenta pero sostenida recuperación, que aunque no ha vuelto menos urgentes las deudas sociales de nuestro país, sí había cambiado, y mucho, las condiciones **objetivas** en que se desenvolvía la lucha social en la Argentina.

En primer lugar, la progresiva reducción de los planes sociales asestó un golpe mortal a las organizaciones “piqueteras” disidentes. Ha demostrado, a nuestro entender, que el éxito relativo de muchos partidos de la izquierda tradicional en generar para sí una base propia de sectores desocupados dependía en buena medida de la cooptación de “intermediarios” –léase “punteros”- al estilo de la misma política “burguesa” que condenaban, con los componentes autoritarios del caso, y no del creciente reclamo de grupos de obreros desocupados “conscientes” –no importa qué entelequia implique este término- opuestos al orden social vigente. Esto nos obliga a reubicarnos en un escenario político donde **ningún actor social cuestiona seriamente los fundamentos del sistema capitalista**, donde quienes indican aquí o allá los gérmenes de una vanguardia revolucionaria bien harían en consultar a un oftalmólogo.

En segundo término, asistimos al renacimiento de reclamos de naturaleza puramente gremial –y, **lo que es más importante, sectorial**- relacionados con las condiciones de trabajo y existencia de obreros empleados. Los conflictos más importantes de este año 2005 no han sido protagonizados por organizaciones de trabajadores desocupados, sino por sectores plenamente “incluidos” en el sistema, que lógicamente buscaban, en pleno ejercicio de sus derechos sociales, hacerse con una porción de la tan mentada recuperación económica.

Sin embargo, las cosas no son, todavía, tan simples. La principal central sindical se halla bajo el liderazgo político del sindicalismo peronista, que ha mostrado altos niveles de esclerosis y burocratización en tiempos recientes –correlatos lógicos del proceso que venimos reseñando-.

Este liderazgo, aunque renovado parcialmente con el nombramiento como Secretario General del camionero Hugo Moyano, se ha mantenido aliado al Gobierno

casi sin fisuras. Formado por profesionales del oportunismo, no puede preverse cuál sea su alineamiento futuro.

Privados largamente de una conducción nacional, grupos minoritarios de los sectores ocupados se han dado formas de organización más democráticas y directas, con un alto protagonismo de las bases en la toma de las decisiones –por ejemplo, el caso de la huelga de Subterráneos y Trenes- y centradas en la conformación de comisiones internas, en general, en el propio lugar de trabajo.

Subsiste la pregunta acerca de cómo ha de adecuarse la dirigencia sindical tradicional a estas formas de organización, en una Argentina de avance del empleo y crecimiento económico sostenido, pero también de salarios de pobreza. Esa pregunta se vuelve más enigmática en el marco de una fortísima crisis de legitimidad y representación de dichos liderazgos.

Reflexiones finales: entre el anticapitalismo y la *Realpolitik*.

Los últimos quince años han atestiguado enormes transformaciones en la vida de nuestro país. En cierto modo, se ha desarrollado hasta sus consecuencias finales el programa de la última dictadura militar. Nunca fue tan difícil como ahora (supuesto que los actores se planteen el problema como tal) conciliar las necesidades del crecimiento nacional bajo un sistema capitalista –y por ende, las necesidades de la burguesía dominante y de los poderes internacionales con los que se asocia o compite- con los problemas cotidianos de los sectores populares, ora marginados del circuito de producción, distribución y consumo, ora integrados, pero igualmente pobres.

En parte, como hemos señalado, la misma entidad del problema es específica a la Argentina, pues sólo aquí la historia, la cultura y la experiencia de las luchas pasadas han perdurado en un acervo ideológico antagónico a la aceptación sin más del nuevo orden económico y social impuesto en los '90. Es este acervo el que vuelve “excluido”, “piquetero”, o huelguista a quien sería en otras regiones simplemente un marginado más, o bien un trabajador con diferente capacidad de organización y respuesta¹¹. Pero no hay dudas en el sentido de que la escala de lo discutido es latinoamericana, e incluso abarca a todos los países “dependientes” del antes llamado “Tercer Mundo”. Se trata de cómo navegar, si es aún posible, entre el Escila de un capitalismo con crecimiento sostenido pero sin inclusión –y, lo que es peor, dramáticamente excluyente-, y el Caribdis de un proyecto popular políticamente factible pero económicamente inviable.

No creemos casual que la multiplicación de los dilemas inherentes a la construcción de un capitalismo nacional o regional con cierta capacidad de inclusión social coincida con el momento de mayor confusión en lo que respecta a las alternativas al orden social vigente. Ni el marxismo ni sus autoproclamados herederos – como por ejemplo el “autonomismo” filozapatista, teorizado por analistas como Toni Negri- se han mostrado capaces de devenir alternativas políticas o ideológicas en la nueva coyuntura. Nunca pareció tan utópico plantear un horizonte no capitalista, y esto explica a la vez la confianza de los personeros del neoliberalismo, que aún derrotados se saben capaces de aprovechar en el corto plazo nuestra carencia de un proyecto alternativo coherente –al menos, tanto como el suyo- que rebase la mera impugnación ética. Conocen nuestra necesidad de fusionar la militancia de tipo social que veníamos practicando –un paliativo insuficiente frente a la capacidad destructiva de que fueron capaces nuestros predecesores- con la gestión política de las ruinas de las naciones en que vivimos. Si bien nos hallamos frente a una oportunidad histórica, esa moneda tiene su reverso: no aprovecharla implica ceder lo conquistado en la arena política, y volver a contemplar, no sin impotencia, cómo los vencidos de ayer culminan su trabajo.

Nos encontramos en una etapa de transición no exenta de paradojas. Por ejemplo, la más evidente que surge de este trabajo estriba en que la lucha social en la Argentina, embrionaria durante la década y media de hegemonía cultural del neoliberalismo, se ha desarrollado de modo exponencial precisamente a causa de la derrota política de éste, y de las posibilidades históricas que ello abre. Y, como argumentaremos, ese desarrollo exponencial corre el riesgo de ignorar dichas posibilidades en el marco de la nueva coyuntura política y social abierta tras dicha derrota.

La nueva fuerza popular ha nacido, cierto es, fruto de su propia voluntad y esfuerzo, producto de luchas cotidianas que parecen imperceptibles a la distancia, pero que culminan, todas ellas, en esas mágicas jornadas de diciembre de 2001. Es, por lo tanto, protagonista innegable e imprescindible del proceso actual, que ha generado y apuntalado. Pero al mismo tiempo, es incapaz de culminar la tarea iniciada, al menos por sí misma. Es decir, en la vieja jerga leninista, es el *sujeto histórico* de la transformación, pero aún no es lo suficientemente fuerte como para llevarla a cabo.

Mientras tanto, a no ignorarlo, ha sido fortalecido *deliberadamente* por un Gobierno en que cristalizan muchas de nuestras posibilidades de gestar un proyecto popular alternativo, un proyecto esbozado apenas en esos tumultos pasajeros, en

aquellas madrugadas febriles, en las marchas interminables, en las escaramuzas que devolvieron a la lucha callejera su lugar en nuestra historia.

Ha crecido alentada *implícitamente* por ese mismo Gobierno, que diariamente disputa, así en la arena simbólica como en la material, tanto en el discurso como en la praxis, un grado de autonomía relativa frente al bloque dominante que le permita subsistir hasta que constituya la base social necesaria para ulteriores transformaciones, una base que depende de la continuidad de una militancia constructiva, pero también de la reflexión acerca del rumbo de nuestra actividad.

Ha crecido, finalmente, apoyada *explícitamente* por ese mismo Gobierno, que no ha cejado en integrar el entero entramado de organizaciones sociales a la generación de nuevas ideas, a la clarificación de los objetivos que persiguen sus acciones, a la propia implementación de sus políticas. Es por todo esto que postulamos, como hipótesis de trabajo, la idea de un **proceso de democratización**, en marcha desde diciembre de 2001, pero relanzado con fuerza por la Administración Kirchner.

Si volvemos a pensarlo, no se trata de una paradoja. El Gobierno alienta la lucha –excepción hecha, vale aclarar, cuando se trata de trabajadores estatales, lo que nos habla todavía de las tensas y contradictorias batallas que se libran puertas adentro, en las antecámaras de la política oficial- porque la lucha obliga a su intervención en pos el interés común, legitima su accionar y le permite ampliar las bases de consenso acerca del “nuevo” / viejo papel del Estado como árbitro en la arena de la sociedad. Y todo ello frente a un bloque dominante que requiere de su abstención para liquidar con suma facilidad –justo como en los ’70, pero ahora en condiciones económicas “puras” (desempleo, marginalidad y miseria masivos), toda forma de protesta y acción colectiva.

En los años noventa, la victoria política lo era todo para nosotros. Llenos de urgencias, postergamos muchas veces la necesaria reflexión que hoy requerimos. Queríamos vencer, pero nunca imaginamos que, después de todo, vencer era sólo el comienzo.

Federico Gabriel Vázquez
fedevazquez@gmail.com

Ezequiel Meler
ezequielmeler@hotmail.com

¹ Antonio Gramsci: *Antología*, México, Siglo XXI, 1999, p. 493.

² Se ha instalado desde los órganos oficiales el argumento que señala la incapacidad para controlar esta coyuntura inflacionaria como principal razón del relevo del Ministro de Economía, Roberto Lavagna. Para otra mirada sobre el tema, Cfr. Meler, Ezequiel: “Crónica de una muerte (muy) anunciada: La caída de Roberto Lavagna”, en www.rebellion.org, 4/12/2005.

³ Es importante recordar que, en las zonas urbanas, el impacto cultural de la inmigración europea se había traducido en una clásica aspiración de los sectores medios urbanos a que los miembros de la siguiente generación estuviesen alejados de las tareas manuales, y se enrolaran en las más prestigiosas profesiones liberales, como medicina o derecho. Una buena obra que refleja esta tendencia es la del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez: *M' hijo el doctor*, Buenos Aires, Kapelusz, 1953 [original: 1903]

⁴ El propio Cavallo, Ministro de Economía de Carlos Menem, admitía que no podía vivir “con menos de diez mil dólares por mes”, casi el doble de su salario oficial.

⁵ Véase Meler: “Acerca del surgimiento y crítico presente de las constelaciones progresistas (1990-2005). El caso argentino”, en www.rebellion.org, 29/11/05.

⁶ Un material interesante sobre este tema es José Nun: *Marginalidad y exclusión social*, Buenos Aires, FCE, 2003. Nun es actualmente Secretario de Cultura de la Nación.

⁷ Véase James, Daniel: *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976.*, Buenos Aires, Sudamericana, 1990, pp. 128-144.

⁸ No cabe, a nuestro entender, hablar de “límites”, “ideología” en tanto que “falsa conciencia”, etc. Esto se debe a que estamos considerando las particularidades de una formación históricamente causada. Para decirlo de modo más claro: juzgar un proceso por sus “límites” implica necesariamente tomar como punto de referencia para el mencionado juicio de valor algún modelo –generalmente teórico o ideal, pero pocas veces histórico- que describe las cosas tal cual deberían ser. Pero explicar los procesos históricos requiere partir de la comprensión de las razones que los hacen ser como son, y no como debieran. Por otra parte, cada situación histórica es en sí misma una suma de particularidades que deben tenerse en cuenta: sólo si partimos de la aceptación de la realidad tal cual es –por desagradable que sea- podremos encarar las transformaciones que buscamos.

⁹ Al respecto, O'Donnell, Guillermo: *Estado y alianzas en la Argentina, 1955-1976*, en CEDES, Documento de trabajo N° 5, 1976. Hay reedición en *Desarrollo Económico*.

¹⁰ El 26/6/02, una jornada de protesta social de sectores desocupados fue reprimida a balazos en el Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y sus participantes perseguidos por buena parte del conurbano. Menos de 72 horas más tarde, tras los prolegómenos de la inminente respuesta popular, el Presidente Duhalde anunció las elecciones presidenciales anticipadas.

¹¹ Con esto no pretendemos caer en forma alguna de chauvinismo. Al contrario, intentamos reconocer las razones por las cuales fue más arduo el trabajo en países que no contaron históricamente con los niveles de integración social de la cual hizo gala tal vez excesiva la Argentina, mientras la tuvo. Eso no nos vuelve mejores, simplemente nos hace distintos, diversos respecto de algunos de nuestros países hermanos.